

Las tensiones de la participación ciudadana

Participación y la Constitución de la Ciudad de México

Dr. Héctor Tejera Gaona

En esta ponencia exponemos algunos de los contenidos de la reciente Constitución Política de la Ciudad de México que expresan cómo, desde hace casi dos décadas, las formas de participación y representación ciudadanas que se han impulsado en la capital del país están matizadas por la confrontación política entre diversos grupos de interés asociados a los partidos políticos, a la vez que las formas de representación formal ciudadano no han sido mecanismos de empoderamiento, sino de intermediación entre éste y los gobiernos emanados de la izquierda.

Los diversos ordenamientos legales que han generado mecanismos formales de representación vecinal han sido coloreados por la estructura política predominante en la Ciudad de México. Una oportunidad de analizar otro ámbito de acción de dichos grupos de interés, y que confirma las dificultades para que la participación ciudadana sea un elemento que impulse la instauración, permanencia o ampliación de la democracia, se expresa en las negociaciones y los contenidos que se han integrado a la nueva Constitución de la Ciudad de México.

La participación ciudadana influye en las decisiones de gobierno y en el sistema político, buscando mejorar las condiciones de quienes integran una comunidad, barrio o colonia, más allá de un beneficio personal o ascenso político (Tejera, 2015). Pero los contenidos formales de la participación están acotados por contextos sociopolíticos particulares y, en el caso que ahora nos ocupa, que se expresan en mecanismos formales (jurídicos) de participación expresados en un conjunto de normas y ordenamientos que definen sus alcances.

Por lo anterior, en las siguientes páginas nos enfocamos, más que en algunos efectos que hasta el momento han tenido los actuales ordenamientos jurídicos que han delimitado la participación ciudadana formal, a las modificaciones que, en su caso, se han suscitado en dichos ordenamientos jurídicos que en relación a la participación ciudadana, se han debatido y, en su caso, forman parte de la nueva Constitución.

La cuestión es: a) ¿qué tanto se avanza en los ordenamientos jurídicos actuales, en comparación a aquellos que ya estaban establecidos en otros ordenamientos legales, como es el caso de la “Ley de Participación Ciudadana” promulgada en 2006 por primera vez?: por un lado; y b) ¿cuánto se profundizó en el contenido democrático en dicha Constitución, para impulsar la participación ciudadana democrática?: por otro.

Estas dos preguntas se enmarcan en una discusión más amplia, que se caracteriza por el cuestionamiento del carácter democrático, con intervención en su integración de la ciudadanía, de la Asamblea Constituyente. Durante el desarrollo de los trabajos relacionados con la redacción de su articulado, una de las afirmaciones constantes refería a que la integración de la asamblea constituyente era autoritaria.

El acuerdo entre la mayoría de los grupos políticos y las fuerzas políticas agrupadas en partidos—con la excepción del Partido de Renovación Nacional (Morena) que a partir de 2015 ocupa la mitad de las posiciones de gobierno y legislativas elegidas por votación en la Ciudad de México--, fue que un 60% de la Asamblea podía ser elegida mediante el voto de los ciudadanos en las urnas, mientras que el 40% restante se designaría por el poder legislativo federal, el gobierno de la ciudad de México y la Presidencia de la República. Esta característica de la asamblea constituyente generó, no sin razón, múltiples críticas; entre ellas, que la participación electoral de la ciudadanía de la Ciudad de México solamente había influido en la designación de tres quintas partes de sus integrantes, mientras que las otras dos fueron elegidas por electores *de facto*. Los analistas que criticaron este acuerdo pronosticaron que condenaba a la constitución a ser profundamente antidemocrática. La elección de los designados fue distribuida de la siguiente forma:

14 por la Cámara de Senadores
 14 por la Cámara de Diputados (Morena declinó la designación de un diputado)
 6 Presidencia de la República
 6 Jefe de Gobierno

Indudablemente esta integración dejó mucho que desear en cuanto al componente democrático de la Asamblea Constituyente pero, reiteramos la pregunta: ¿modificó acotando más los lineamientos jurídicos mediante los cuales los ciudadanos pueden influir en las políticas gubernamentales? Uno podría esperar contestar afirmativamente esta pregunta debido al cambio en la integración política de quienes la formaron. Como puede verse en el siguiente cuadro, un partido que, como el PRI (el partido del Presidente de la República) obtuvo en la capital el 7.8% de la votación en las elecciones de 2015, lo que le otorgó cinco diputados, con el procedimiento de las designaciones obtuvo en la Asamblea Constituyente 21, ya que Senadores, Diputados y La presidencia de la República escogieron a 16 representantes de este partido.

Cuadro 1. Designados y electos por partido para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Noviembre de 2016

Partido	Electos	Designados
PAN	7	8
PRI	5	12
PRD	19	4
Morena	22	0
Encuentro Social	2	1
Nueva Alianza	2	1
Ejecutivo Federal y local		12
Total	57	38

Debido a que la Constitución debía ser aprobada por 66 de los 100 constituyentes (las dos

terceras partes), este reparto de cuotas entre ciudadanía y partidos permitió acotar las propuestas del PRD y, particularmente, de Morena, cuya influencia ha aumentado notablemente en la Ciudad de México y es encabezado por el dirigente López-Obrador (tres veces candidato a la Presidencia de la República apoyado por los partidos de Izquierda). En efecto, fue evidente que, particularmente tanto el PRI como el PAN (el partido de derecha más importante) se convirtieron en un constante obstáculo a las propuestas realizadas por los partidos de izquierda que, como se sabe son mayoritarios en la Ciudad de México.

En términos generales, desde la propuesta inicial entregada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y elaborada por un equipo de redacción convocada por éste, se ha criticado a la Constitución Política de la Ciudad de México por su carácter garantista, y durante las sesiones en las cuales se discutió el articulado de la misma, dichas garantías fueron constantemente cuestionadas por el PRI y el PAN aduciendo sustancialmente la carencia de presupuesto para hacerlas efectivas. La respuesta a esta objeción fue que los lineamientos de ninguna constitución habían sido acotados a la disponibilidad presupuestal. No obstante, fue una objeción reiterada durante los debates de las propuestas. También se apeló a la Constitución Federal como el límite para reconocer los derechos propuestos en la Constitución local. Uno de los temas de profunda controversia fue el artículo 29, donde además de la ciudadanía universal, se proponía el derecho de los jóvenes a votar desde los 16 años. Mientras que para unos era una ampliación de la ciudadanía, para otros se contraponía con la Constitución Federal. El PAN y el PRI consideraron que era inconstitucional pues “contraviene el concepto de ciudadanía que se adquiere al cumplir 18 años y, a esa edad se puede comenzar a votar”. Se sostuvo que además perjudicaba a los jóvenes porque les daría tratamiento penal de adultos. Por su parte, los perredistas argumentaron que era una propuesta de ampliación de derechos, no de obligaciones.

Conforme se fueron ajustando los trabajos, fue cada vez más evidente que las posiciones más reticentes con respecto a los derechos humanos (más allá de la insistente negativa a otorgarlos por “falta de presupuesto” como si en la Constitución Mexicana de 1917, derechos como la educación y la salud hubiesen sido cuestionados por la carencia de recursos); fueron las organizaciones como el “Frente Nacional por la Familia”, “Ciudad Posible” y la “Coordinadora Ciudadana”, quienes buscaron impedir la promulgación de la Constitución. Personajes como José Luis Luegüe (quien fuera Secretario del Medio Ambiente entre otros puestos en las administraciones panistas), cuestionó que las propuestas que ellos realizaron no fueron admitidas (particularmente “el derecho a la vida desde la concepción”. Por ello comenzaron a cuestionar “los vicios e irregularidades “porque no todos los diputados fueron electos”. En todo caso interpusieron 165 amparos contra diversos artículos que, desde su perspectiva se contraponen o violan derechos fundamentales (Periódico *El Universal*, 27/03/2017) Además, y en eso coinciden con muchos de los críticos de izquierda, lo más importante es que el referendo no fue utilizado para decidir sobre los temas candentes en la capital. Ciertamente la experiencia ha sido que quienes tienen la capacidad de movilizar a sus clientelas son los que usualmente definen el direccionamiento de los mismos.

Además de proponer una serie de órganos autónomos (artículo 48), en la mayoría de los casos prosperó la idea de que sus directores fueran elegidos por Consejos Ciudadanos. De esta forma, la denominada Defensoría del Pueblo (hoy Comisión de Derechos Humanos), el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, La Fiscalía General de Justicia, el Instituto

de Acceso a la Información, el Instituto de participación Ciudadana y Elecciones (el actual IEDF), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral, el de Justicia Administrativa, el de Conciliación y Arbitraje, así como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; cada uno de ellos contará con un Conejo Ciudadano elegido cada cuatro años.

El Jefe de Gobierno, que no Gobernador, una de las limitaciones actuales de la legislación que rige a la Ciudad de México, y que acota los poderes de quien es elegido como tal, formó un grupo asesor con perspectivas diferentes, el cual intervino en la redacción de la propuesta entregada a la Asamblea Constitucionalista. Puede sostenerse que el grupo redactor, integrado por 28 catedráticos, investigadores, especialistas y políticos, mostró la tendencia a realizar una propuesta dirigida a impulsar y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos de la capital del país. De esta forma, entre sus redactores encontramos a quienes explícitamente consideraron que se requería de una constitución porque: “las libertades de los mexicanos están en peligro cuando algunas iglesias quieren convertir sus dogmas en leyes obligatorias para todos los mexicanos; las libertades peligran cuando la propiedad y la vida de los ciudadanos están coaccionados por pequeños y grandes grupos criminales; la libertad peligra cuando grupos económicos extranjeros y mexicanos tienen derechos sobre grandes extensiones de territorio para fines de explotación minera” (Rodríguez Kuri)

En términos de la participación ciudadana, como se verá sintéticamente en el cuadro 2 que incluimos más adelante, las propuestas realizadas por el grupo redactor se mantuvieron sin cambios sustanciales en referencia a la “Ley de Participación Ciudadana”. Los intentos de disminuir los topes de requisitos que dicho grupo había formulado, manteniendo lo ya establecido en dicha Ley no se modificaron sustancialmente. Lo más importante fue la inclusión de nuevos actores, como los pueblos indígenas en el empleo de estos mecanismos de consulta y participación ciudadana, aunque ciertamente también se le quitaron esa posibilidad a formas de representación formal como los Consejos Delegacionales.

El primer intento de contar con la participación ciudadana fue la propuesta de operar como Parlamento Abierto, transparencia y máxima publicidad. Según diversos legisladores de los grupos parlamentarios, la celebración de algunos foros que se realizaron antes de que se entregara la propuesta de Mancera a la Asamblea Constituyente fue una oportunidad para impulsar dicha participación. Quizá lo más significativo del lugar que ocupó la participación ciudadana en la elaboración de la Constitución haya sido que de las 1,406 iniciativas entregadas, 853 fueron elaboradas por ciudadanos u organizaciones de muy diversa índole (las otras 553 fueron propuestas por los diputados constituyentes). La cuestión es que la mayoría de ellas fueron desechadas sin que se haya establecido claramente la metodología para hacerlo. Además, no obstante que 140 organizaciones integradas en el Observatorio Ciudadano para la Asamblea Constituyente solicitan que se constituyera una Asamblea Abierta, finalmente muchos de los acuerdos se establecieron en pequeñas reuniones de los dirigentes de los grupos partidarios.

Al comparar los diferentes requisitos que se fueron proponiendo antes, durante y al término de los trabajos de la Asamblea Constituyente, en relación a los mecanismos de participación ciudadano como son la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana y popular, así como la revocación de mandato, encontramos en términos generales lo siguiente:

a) Iniciativa ciudadana

La ley de participación ciudadana establecía como requisito el 0.4% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para realizarla, y también la podían convocar el 10% de los comités ciudadanos y al menos ocho de los consejos delegacionales. En el transcurso de las negociaciones se incremento hasta el .25 de os ciudadanos , para disminuir en .13%. De todas formas el candado se estableció en que será preferente si lleva el .25% de las firmas de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Se disminuyó el número de actores que pueden generar una iniciativa ciudadana se incremento el porcentaje de ciudadanos, si se desea que tenga carácter preferente (es decir, que sea considerada por los diputados de la Ciudad de México)

b) Referéndum

En la Ley de Participación Ciudadana un diputado de la Asamblea Legislativa podía convocar a referéndum, así como el 4% de los ciudadanos y ocho Consejos Delegacionales. Conforme se fueron estableciendo las negociaciones desaparecieron propuestas como los pueblos comunidades originarias, las arcadias y los organismos autónomos. Finalmente quedaron el 0.4% de los ciudadanos y dos terceras partes del Congreso de la Ciudad.

c) Plebiscito

En la Ley de participación Ciudadana se establecían el 0.4% de los ciudadanos, el 10% de los comités ciudadanos y ocho consejos delegacionales. En el proyecto desaparecen los comités y los consejos, pero se incluía al Jefe de Gobierno, una tercera parte del Congreso Local, los organismos autónomos y los pueblos y comunidades indígenas y barrios originales. En algún momento regresaron los comités (Proyecto de Dictamen), pero en el Dictamen aun cuando disminuye el numero de ciudadanos requeridos, desaparecen los comités, y las comunidades étnicas, así como los organismos autónomos. Finalmente queda el 0.4% de los ciudadanos, el Jefe de Gobierno, una tercera parte del Congreso Local y dos terceras partes de las alcaldías.

d) Consulta Ciudadana

De la ley de participación Ciudadana donde la Consulta podía realizarse a solicitud del jefe de Gobierno, los Jefes delegacionales, las asambleas ciudadanas y comités y consejos, encontramos que es la única figura donde los pueblos indígenas podían participar, siempre en coordinación con el Consejo del Pueblo, que es la forma que adquieren los comités en las delegaciones platicas rurubanas y con pueblos originarios. El proyecto de constitución ampliaba esto a solicitud de los habitantes de pueblos y colonias, mientras que el proyecto de dictamen acotaba la propuesta que al menos el 1% de los ciudadanos de la lista nominal la solicitaran. La Comisión de la Asamblea Constituyente aumento ese requisito al 2%, y que se considerara vinculatorio con un 15% de solicitantes. Finalmente la Constitución establece solamente al 2% de los habitantes, y su carácter vinculatorio se establece, con el porcentaje anterior del 15%

e) Consulta Popular

Desaparecen en el proyecto de Constitución todas las formas que estaban consideradas dentro de esta figura y que realmente no tenían nada que ver con consulta popular como recorridos del Jefe delegacional, la Red de Contralorías Ciudadanas, la Colaboración Ciudadana y otras. La figura reaparece en el Proyecto de Dictamen con un requisito del 0.4%, de ciudadanos, además de Jefe de Gobierno, una tercera parte de los integrantes del Congreso Local 10% de los comités o Asambleas y los pueblos y comunidades originarias. Finalmente queda con el 2% de la lista nominal.

f) Revocación de mandato

Esta figura es novedosa, aunque es una de las que tiene más “candados”. En el proyecto de Constitución tiene como requisito el 10% de los ciudadanos y es vinculatorio si se revoca el mandato con la misma cantidad o más de los votos que obtuvo el representante popular. Finalmente, se considera vinculatorio si el 60% del 40% de los inscritos en la lista nominal vota por la revocación. Es decir, se requiere una participación inusual del 60% del padrón.

Como puede observarse en cuestiones tales como el plebiscito y la consulta popular, en las negociaciones se había disminuido el porcentaje necesario que los ciudadanos requerirán para solicitarlos, los cuales fueron aceptados como mecanismos de la Constitución para aceptar o rechazar decisiones del Poder Ejecutivo local, así como temas de interés público en general. Sin embargo, los legisladores constituyentes volvieron a “subir la vara”—como se dice coloquialmente--, ya que en algún momento se había reducido al 0.2% del padrón electoral el requisito para solicitarlo pero regresó al 4.0 de las personas inscritas en el lista nominal “se ajustaron los porcentajes para evitar un desgaste de los mecanismos por pedir un tope muy bajo de firmas” afirmó Mayela Delgadillo, diputada de Morena.

Además se adicionó la propuesta de realizar consultas populares, lo cual no estaba en la propuesta del jefe de Gobierno, la cual se realizara el mismo día de las elecciones y podrá ser utilizada para consultar temas de interés general de la Ciudad, pero cuando se había propuesto que solamente con el 0.4% del listado nominal pudiera realizarse, ahora los constituyentes aprobaron subirla al 2% , con lo cual de 28 mil firmas se incrementó a 140 mil para ser realizada. Entre otros casos donde el número de firmas para realizarse disminuyó fue en el caso de la iniciativa ciudadana (donde pueden proponerse leyes o decretos) pues se disminuyó el requisito de 0.25 a 0.13 a propuesta de PAN.

El contenido de la Constitución no solamente es un articulado con alcances y limitaciones sobre la participación ciudadana, sino que expresa implícitamente cuáles son los derechos ciudadanos y, por tanto, el tipo de ciudadano con el cual el gobierno desea relacionarse. En el articulado relacionado con la participación ciudadana, aunque no exclusivamente en éste, se expresa cuál es la concepción de democracia y formas de relación con el gobierno que muestran los diversos grupos de poder integrados a los partidos políticos que participaron en la redacción de la Constitución. Son también el sustento de políticas públicas imbricadas en reglas formales mediante las cuales se expresa cómo se desea que se ejercida la ciudadanía y de la relación que para ello se debe entablar con el gobierno.

Los diversos artículos de la Constitución de la Ciudad de México acotan los derechos ciudadanos donde se expresan exigencias, deberes y derechos. A su vez, generan un horizonte de significación matizado por relaciones de poder y dominación. Es un horizonte donde los ciudadanos se configuran y juzgan a sí mismos (Foucault, 1991; Murray, 2007); y donde se establecen comportamientos, se educan deseos delineándose las fronteras de la participación. Una participación donde diversos actores políticos y gubernamentales confluyen, otorgándole contenido tanto a la democracia directa como tema particular, y a la participación ciudadana en general.

Cuestiones que delimitan los artículos constitucionales como “las varas “ que los ciudadanos deben saltar para ejercer determinados derechos, no están diseñados para

ejercer la ciudadanía, sino para limitarla. La cultura política y la búsqueda del control político no solamente matiza las relaciones políticas, sino que se expresa en los preceptos generales (en esta caso la Constitución) y establece los principios del ejercicio del poder sobre los alcances de la participación y las formas de reconocerla como tal. De esta forma cada una de las figuras de participación contenidas en la Constitución expresan formas particulares de ejercicio del poder político bajo los contenidos de cuestiones como porcentajes y quienes pueden participar; es decir, quienes, cuantos y bajo que condiciones pueden influir o cuestionar el poder político.

En todo caso, la Constitución establece las reglas o formas “adecuadas” bajo las cuales se acepta la participación ciudadana (Rathgeb e Ingram, 2002: 56). No se está promoviendo la participación, sino previéndose de que ella exista y estableciendo los obstáculos para limitarla. Por eso hemos propuesto que la ciudadanía es no solamente una definición sobre derechos y deberes (como los establecidos en la Constitución), sino un orden simbólico de la relación entre ciudadanos y gobierno, y que en el marco de marco de la gobernabilidad sustenta la formación de una *gobermentalidad* ciudadana.

En la Ciudad de México se han reproducido en los últimos veinte años condiciones político-culturales que obstaculizan la participación autónoma ciudadana, ya que tanto los contenidos formales de reconocimiento participativo, como es el caso de los comités ciudadanos, así como la participación en general, usualmente acotada por las relaciones políticas de carácter clientelar y corporativo; las posibilidades reales de ejercer derechos como el plebiscito y el referéndum, por mencionar dos de dichos “derechos” reconocidos ahora constitucionalmente, no se han ejercido en otros momentos porque toda participación se “domestica” al limitarse “constitucionalmente”.
















































Ante las limitaciones y obstáculos que los diputados constituyentes de todos los partidos (incluyendo quienes supuestamente buscan impulsarla per cuidan que las formas de participación “no se desgasten”, como lo hace la diputada de Morena, lo que hay detrás son casi 20 años en os cuales los gobiernos de izquierda han intentado controlar la participación a causa del miedo de que a través de está se tengan que enfrentar a los partidos políticos de oposición (lo cual es relativamente cierto). Lo más usual entonces es despojar a la participación de su contenido de práctica que influye en las decisiones de gobierno y la han convertido en parte de los “programas de gobierno” pero con el propósito de generar una ciudadanía dependiente. Algunas formas de participación que solamente se mencionan en la Constitución, pero que seguramente se establecerán en las leyes secundarias, han sido hasta el momento utilizadas para la promoción de los jefes delegacionales en sus aspiraciones políticas. Como hemos dicho en otro espacio:

Las áreas de participación ciudadana se han transformado en las oficinas de campaña de las delegaciones; en ellas se promueve al delegado hacia otros puestos (diputado federal o, al menos local), como a los funcionarios entre los cuales será elegido el siguiente jefe delegacional. En ellas se siguen los programas de gasto social, se levantan los censos y se establece la relación estrecha entre ciudadanos y “burócratas de calle” que ejercen labores de promotores delegacionales y a la vez son representantes de organizaciones sociales de carácter vecinal. Es ahí donde se promocionan los programas sociales y se “invita” a que los beneficiarios asistan a las mencionadas “asambleas ciudadanas” o “audiencias públicas” que se caracterizan por su contenido político-clientelar y de

La Constitución es, en todo caso, un espacio donde de manera entre soterrada y expresa se manifiestan tanto la posición que sobre la misma tienen de los actores políticos, como las interpretaciones que hacen de ella. No se trata de impulsar la planeación participativa y la rendición de cuentas (Slumovitz y Peruzzotti, 2000) para fortalecer la ciudadanía y su influencia en el quehacer gubernamental, sino que establecen barreras que generan distancia entre el ciudadano y el quehacer público y fomenten la inmovilidad cívica. Prevalece la idea de que el ciudadano debe ser tratado como *sector popular*, porque es lo más rentable al mantener su dependencia política. Es también un *ciudadano estadístico*, y se controla a partir de que la ciudadanía se transfigura, de ejercicio social a expresión estadística (Baudrillard, 1978: 23-24).

Se ha sostenido que al intervenir en las decisiones gubernamentales, se propician condiciones para generar confianza y legitimidad gubernamentales (Peters, 2005: 586-87) pero el empoderamiento ciudadano es una ficción porque no existen condiciones reales para que se trasmite hacia las instituciones gubernamentales y políticas (O'Donnell y Schmitter, 1986: 8).

CUADRO COMPARATIVO DE INSTRUMENTOS Y ACTORES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CUADRO COMPARATIVO DE INSTRUMENTOS Y ACTORES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
	Iniciativa ciudadana	Referéndum	Plebiscito	Consulta Ciudadana	Consulta Popular	Revocación de Mandato
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal	Requisitos: 1) 0.4%  2) 10%  3) 8 	Requisitos: 1) uno o más  2) 0.4%  3) 10%  4) 8 	Requisitos: 1) 0.4%  2) 10%  3) 8  Vinculatoriedad: 10% 	Requisitos: 1)  2)  3)  4)  5)  6)  7) 		
Constitución Política de la Ciudad de México	Requisitos: 0.13%  (preferente) 0.25% 	Requisitos: 1) 0.4%  2) 2/3  Vinculatoriedad: 1/3 	Requisitos: 1) 0.4%  2)  3) 1/3  4) 2/3  Vinculatoriedad: 1/3 	Requisitos: 2%  Vinculatoriedad 15% 	Requisitos: 1) 2%  2)  3) 1/3  4) 1/3  5) 10%  o  6) 10% 	Requisitos: 10%  Vinculatoriedad: 40% 
Simbología de Actores	 Ciudadanos inscritos en la I.n.e. del ámbito respectivo  Comités Ciudadanos/Vecinales  Asambleas Ciudadanas  Consejos Delegacionales			 Jefe de Gobierno  Asamblea Legislativa/Congreso Local  Delegaciones/Alcaldías  Consejos de Pueblos/Pueblos y Comunidades Indígenas, y Barrios Originarios		

Fuente: Elaboración propia con base en las leyes correspondientes. En las Alcaldías aparecen actualmente los Consejales en lugar de los Consejos Delegacionales, pero aquellos no se vinculan directamente con algún instrumento de participación ciudadana.

Bibliografía

- O'Donnell, Guillermo y Philippe, Schmitter, 1986 *Representative government and representation; Authoritarianism; Democracy; Case Studies*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Peters, Guy, 2005 “Gobernanza y burocracia pública: ¿nuevas formas de democracia o nuevas formas de control?”, *Foro Internacional*, México, El Colegio de México, Vol. 45, No. 4, Octubre, Diciembre.
- Ratheb Smith e Ingram, Helen, 2002 “Rethinking Policy Analysis: Citizens, Community and the Restructuring of Public Services”, *The Good Society*, Volume 11, Num 1.
- Smulovitz, Catalina y Enrique Peruzzotti, 2000 “Societal Accountability in Latin America”, *Journal of democracy*, Volume 11, Number 4.
- Tejera Gaona, Héctor, 2015, *Estructura política y participación ciudadana en la Ciudad de México*, México, Gedisa/UAM.